

LOS GOBIERNOS DE FELIPE CALDERÓN Y ENRIQUE PEÑA NIETO: LA PESADILLA IMPARABLE

PEDRO JOSÉ PEÑALOZA*

*Cuando teníamos todas las respuestas,
nos cambiaron todas las preguntas*

Mario Benedetti

DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO DE LA METÁSTASIS NACIONAL

Un paso adelante, dos atrás

1. Quizás un vector pedagógico e inicial para abordar críticamente la política criminal que se mantuvo durante el sexenio de Felipe Calderón, sería puntualizar la debilidad primaria de la concepción de los estrategas de Los Pinos: hacer abstracción de que la lógica policiacomilitar tiene sus propios límites, que no se puede —por razones organizativas e incluso presupuestales— movilizar por todo el país a miles de elementos de seguridad, realizando operativos simbólicos, puesto que la delincuencia organizada tiene diversos recursos para poder evadir o amortiguar estas demostraciones de “fuerza”, como se ha corroborado reiteradamente.

2. Creer que la delincuencia organizada podría ser desmantelada afectando sólo algunos decomisos de droga o dinero, fue iluso y muy peligroso, puesto que al difundir semejantes acciones como avances infranqueables del régimen implicó construir escenarios reduccionistas, carentes de una comprensión más profunda de la dinámica profesional y del daño social que ocasionó el crimen organizado.

* Profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE).

3. El ex inquilino de Los Pinos nunca pudo entender el significado multidimensional de la seguridad pública. No se trató, por supuesto, de una deficiencia en su capacidad personal; su incomprensión se originó a partir de la ausencia de una construcción de políticas públicas alimentadas por una metodología proveniente de diversos vectores estatales, en lugar de la que se alimentó de los indicadores que fueron elegidos por el llamado gabinete de seguridad nacional.

4. La visión monotemática, núcleo de la preocupación presidencial, partió de una premisa tan elemental como equivocada, es decir, la promoción taladrante de que se podía disminuir la criminalidad, en especial el narcotráfico, mediante un paquete de acciones circunscritas a la órbita de la justicia penal; divorciadas entre sí, distantes de las variables de la política social. Por supuesto, este tratamiento dogmático llevó al país hacia una ruta directa, y sin escalas, al precipicio.

5. Utilizar muchos millones de pesos del dinero público para difundir paradigmas punitivos, con rasgos de los siglos XVIII y XIX (ahora aderezados por el llamado “derecho penal del enemigo”), fue un desplante que ofreció un puerto seguro de llegada. Está comprobado hasta la saciedad, en estudios longitudinales y de medición del comportamiento criminal, que poco tiene que ver el número de detenidos con la disminución de la inseguridad real y en ocasiones de la sensación de seguridad.

6. Es la trasnochada visión que parte de los fórceps conceptuales que tienen quienes creen que el derecho penal es el gran elixir que resuelve la conflictiva social. A los improvisados funcionarios públicos les es imposible entender el significado de la teoría del delito, la cual, por cierto, se plasmó ampliamente desde el año ¡1801!

7. La improvisación fue el signo del gobierno de Felipe Calderón; el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales fueron sólo un requisito formal que mandata la Ley de Planeación, pero de ninguna manera dichos textos representaron la ruta de navegación del gobierno federal. Sólo fueron enunciados que pretendieron legitimar las actividades parciales de los entonces secretarios, que sirvieron para el juego subterráneo de la justificación del ejercicio del gasto y las negociaciones con la Secretaría de Hacienda. Sólo para eso.

8. Lo único que valía era la puesta en marcha de acciones espectaculares decididas por el presidente y sus asesores. Responder a la coyuntura y a los sobresaltos de las encuestas fue el binomio que sintetizó la actuación de la administración calderoniana. Flotar seis años se convirtió en la táctica y en la estrategia. Nada de políticas de largo aliento.

9. En un escenario de descomposición social, de fractura del tejido social, de pérdida de cohesión social y de sentido de pertenencia, un elemento

clave para atemperar y canalizar la volatilidad de las acciones individuales de los ciudadanos es la participación organizada y consciente de segmentos de grupos y franjas de individuos que pretenden recuperar espacios y exigir el cumplimiento de las obligaciones primigenias del Estado, que se plasman en derechos consagrados en la Carta Magna.

VOLUNTARISMO, COOPTACIÓN Y CONTROL

1. La estrecha y premoderna visión del gobierno calderonista se redujo al pretender inducir una participación ciudadana domesticada, acotada y chantajeada por apoyos materiales o magras concesiones en la interlocución. Las posibilidades de que se construyeran instancias verdaderamente autónomas se complicó, y sólo se prestaron a disputas baladíes y clientelares como una copia burda pero grotesca de ese cautivador estilo priísta que ofrecía zanahoria o garrote.

2. Lo que pudimos ver fue la aparición de organizaciones sociales inicialmente independientes, pero inmediatamente cooptadas por el aparato gubernamental; sobre todo aprovechando la composición social de sus dirigencias, aunado a sus desarticuladas proclamas, que no programas. De ahí que estos agrupamientos —mayoritariamente empresariales— se hayan montado en la irritación social y en la desesperanza ciudadana, sin poder tener las luces para articular un movimiento multiclasista que planteara una agenda de políticas públicas que superara el radio de acción del limitado paradigma penalista.

3. Ante estas inconsistencias, el gobierno encontró una magnífica oportunidad para aparentar diálogos y acuerdos, de levantar banderas de inclusión y canalización de las demandas sociales. Inventar su ONG de cabecera, inyectarle recursos económicos y montar comedias meramente terapéuticas, que únicamente buscan distorsionar el ánimo ciudadano. Generalmente estas operetas tienen sus propios límites y rápidamente se vuelven ridículas, se desdibujan los “líderes” y se caen las máscaras. Y la inseguridad sigue ahí, con la rabia social intacta.

4. Frente a esta desorganización comunitaria, el poderío de la delincuencia organizada se mostró palmariamente, puesto que la fractura en la cohesión social perfecciona y alimenta la cultura de la violencia, principal matriz para la captura de espacios y territorios que perpetúan la desigualdad social y congelan la posibilidad de la lucha por la equidad social. La tendencia de esta lógica es dejar en el desamparo a los segmentos más pobres, ya que los que posean excedente económico podrán defenderse mejor de los atajos que ofrece la desesperación social.

5. Por supuesto, lo que emerge en este tablero es la incapacidad del Estado para blindar a los habitantes, especialmente a los niños y jóvenes, con políticas sociales sólidas y duraderas, que les proteja de ser fácil presa de la cultura que imprime e impone la obtención rápida de recursos y la extensión y socialización de la impotencia y el miedo.

6. Por ello, es prudente plantear que la convocatoria a la participación ciudadana en la lucha contra la inseguridad debe contener en su agenda: el reclamo contra la violencia intrafamiliar, la fractura del tejido social, la reivindicación del sentido de pertenencia, la recuperación de los espacios públicos mediante la puesta en marcha de políticas multiinstitucionales. De otro modo, la participación ciudadana estará condenada a ser fácilmente asimilable por el aparato gubernamental. Sin contenido social la participación ciudadana tiende a convertirse en una sumatoria de expresiones efímeras y desgastantes, que no tocan los resortes estructurales que disparan las conductas violentas y/o antisociales.

7. La ciudadanía plena se relaciona positivamente con la cohesión social en la medida en que supone o apunta a la titularidad de un conjunto de derechos que conjugan la dimensión política (participación, deliberación, voz) con lo social (acceso a activos, ingresos, servicios) y la comunicacional (cultura, identidad, visibilidad).¹

8. La otra parte de la ciudadanía plena, igualmente importante, es de carácter jurídico y se relaciona con la exigibilidad de derechos, como la seguridad. Esta dimensión fortalece otro aspecto de la cohesión social, en tanto iguala socialmente frente a la justicia, restituyendo la confianza en esta institución fundamental de la sociedad democrática y del Estado de derecho. Por lo mismo, la exigibilidad de los derechos tiene relación directa con la cohesión social, en tanto hace que cada ciudadano se sienta parte efectiva y no sólo formal de la sociedad, vale decir, que se perciba a sí mismo como ciudadano pleno.² No debemos perder de vista que la ciudadanía sólo existe y se recrea cuando tiene injerencia en la gobernabilidad.

9. Ha quedado claro que la zona más oscura y olvidada del sexenio calderonista fue el tema que involucraba a los ciudadanos con el poder y a la organización horizontal de éstos. Estuvimos en presencia de la construcción de políticas públicas destinadas a favorecer la presencia solitaria de las fuerzas policíacomilitares. La esencia de dicho diseño supone que a los ciudadanos se les controla desde el corporativismo y el clientelismo.

10. El panismo gobernante no pudo deshacerse de la ideología dominante. Su concepción de la democracia se quedó estacionada en el sufragismo

¹ Informe de la reunión de expertos sobre cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, noviembre de 2007, p. 28.

² *Idem*.

y el salto a una fórmula de democracia participativa le causa pánico. Las redes del poder ven en la acción ciudadana una especie de kriptonita que debilitaría su hegemonía.

LA DELACIÓN COMO RECONOCIMIENTO Y LEGITIMACIÓN

1. Romper la moda discursiva no ha sido fácil. Se insiste en (casi) todos los discursos que la participación ciudadana en la seguridad pública es fundamental. El único caramelo que ofreció el gobierno fue la “denuncia anónima”; se trataba de que los ciudadanos vigilaran a hurtadillas y desde la clandestinidad de su ventana, descubrieran a los “otros”. La denuncia y el individualismo se asociaron para fomentar el aislamiento y la desconfianza.

2. No se quiere aceptar que la participación ciudadana en su expresión más rica y trascendente significa auto organización y autogobierno para la satisfacción de diversas necesidades. Colectivizar preocupaciones y certezas, cuestionar el ejercicio del poder y reapropiarse de los espacios públicos, son parte de las tareas que le dan sentido al concepto de ciudadanía. Recrear la diversidad y agrupar los consensos son ladrillos básicos en la construcción y reconquista de zonas que al estar vacías de contenidos y de acciones cotidianas, se convierten en refugios para fomentar la hostilidad y la polarización vecinal.

3. Es en espacios individualistas en donde el narcomenudeo y los asaltos pueden desarrollarse sin problemas. La venta al menudeo de las drogas y la imposibilidad de transitar con libertad son las fotografías descriptivas de la fractura del tejido social y del abandono del sentido de pertenencia.

4. Democracia participativa es la matriz de la participación ciudadana, en su nombre anuncia un rumbo antiautoritario; busca construir la democracia con la participación y en la dialéctica de la participación confluyen las energías de los que no tienen voz. Estamos hablando de remontar la viejísima acepción del individuo que destaca por sus habilidades personales. No, navegar en esas aguas cómodas y nocivas tiene a los ciudadanos del país en la queja terapéutica y en el reclamo aislado.

5. Superar la larga noche del clientelismo y el corporativismo requiere de dos elementos asociados indisolublemente, a saber: una nueva ingeniería institucional y una cultura política que le dé cimientos. Hasta ahora no existen ambos, sólo aparecen como gritos en el desierto o como arengas para adornar discursos oficiales.

6. Por supuesto que conformar nuevas avenidas por donde transiten las demandas ciudadanas implica encontrar reciprocidad en las agencias del

gobierno. Ese desafío es el más importante de la joven democracia mexicana. De ahí parte el aparato circulatorio de un sistema democrático.

7. El ex presidente Calderón y sus secretarios no atinaron en proponer fórmulas novedosas y trascendentes para involucrar a los ciudadanos y garantizar la gobernabilidad democrática. Como ya lo expresamos antes, fue temor e inexperiencia, y nos faltó agregar ignorancia.

8. Seguramente, Felipe Calderón nunca se enteró de la realidad mexicana, no tuvo la información de:

- Que en dos terceras partes de los estados no hay leyes de participación ciudadana.
- La ausencia de secretarios del ramo en una tercera parte de las entidades federativas.
- La falta de contenidos sobre participación ciudadana en nueve leyes orgánicas de la administración pública.
- La carencia de contenidos sobre participación ciudadana en trece leyes orgánicas de las procuradurías generales de justicia.
- La ausencia de funciones de poder, elección y control de la sociedad sobre las instancias y los responsables de la política criminal.
- La falta de programas de seguridad pública en 24 estados, que trajo consigo la nula participación ciudadana.
- La ausencia de programas de procuración de justicia en 29 entidades arrastra a su cauda a la participación ciudadana.³

9. Además de este deficiente panorama, una ley ausente que le competía impulsar a Calderón, y que nunca lo hizo, era la Ley Federal de Participación Ciudadana. Quizá una iniciativa en esta dirección podría significar un gesto democrático genuino, pero como se ha dicho: la democracia, para que exista, exige la presencia de demócratas.

LA ESTRATEGIA PARA UN PAÍS INEXISTENTE

1. Ante la complejidad social y económica que, hasta el día de hoy, atraviesan miles de compatriotas y sus familias, el gobierno calderonista encontró una fórmula para ocultar los vasos comunicantes que existen entre descomposición social y criminalidad, puesto que existe una verificable correlación entre pobreza, desigualdad y marginación, con el incremento de conductas violentas y antisociales.

³ Pedro José Peñaloza, *¿Castigo sin prevención? La crisis del modelo de seguridad pública en México*, México, Porrúa/INACIPE, 2007, p. 113.

2. Si bien la pobreza por sí sola no es factor explicativo de la delincuencia, sí existe una conexión muy clara cuando ésta interactúa con otros factores como la desigualdad, la marginación y la exclusión en la que vive parte importante de la población.

3. Felipe Calderón sólo le dio prioridad a la puesta en marcha de iniciativas legislativas orientadas a construir un sistema procesal autoritario y con ello buscó eclipsar un hecho irrefutable: los factores de riesgo que actúan sobre miles de ciudadanos, pero especialmente en los jóvenes y niños, son el caldo de cultivo nutritivo y proteico para que la delincuencia organizada florezca y se consolide con esa fuerza de trabajo consumidora y consumible.

4. En tanto se buscaba obtener el triunfo prometido sobre los criminales —con la misma vehemencia que la oferta del pleno empleo—, la sociedad mexicana se debatía entre la desigualdad y la exclusión social. Nuestra radiografía era devastadora: la población trabajadora en el campo había decrecido en 3 millones de personas entre 1993 y 2007; el empleo industrial caía desde 2001 y los puestos de trabajo que se estaban creando, por lo general, eran de mala calidad; la informalidad laboral ascendió a 60% de la fuerza de trabajo (la pea registraba alrededor de 44 millones de personas), sin contar con la nueva crisis de emigrantes que estaban retornando al país y a los cerca de 400 mil compatriotas que permanentemente viajaban a Estados Unidos; la pobreza aqueja a más de un tercio de las familias; 10% de la población de más bajo ingreso apenas tiene 1.61% del ingreso, mientras 10% más rico, dispone de 40 por ciento.

5. Frente a las tormentas económicas que apabullaron la timidez y los sueños guajiros de una clase política que flotaba entre las pinceladas del asistencialismo, conservadurismo de párvulos y el keynesianismo tardío, Felipe Calderón se proclamó por la defensa del empleo y de la estabilidad cambiaria, cuando ambas asignaturas parecían repelentes para quienes endiosaron al mercado y se desgañitaron contra las zonas de protección que debe proporcionar el Estado.

6. Sin que la clase gobernante asumiera plena conciencia de ello, un tsunami silencioso, pero intenso, viajaba en el subsuelo y en la superficie del territorio nacional: la exclusión social cuarteaba y realiza efectos trepidatorios ante el desdén de una burguesía soberbia y acomodaticia que chantajea y plantea la añeja dicotomía: empleo o aumento salarial.

7. Traer el concepto de “movilidad social”⁴ nos puede ayudar a entender la dimensión de la desesperanza que se vive en amplias capas de la pobla-

⁴ La movilidad social se define como la posibilidad que tienen las personas para ascender o descender de posición en la escala de bienestar socioeconómico. Se dice que es absoluta cuando

ción. Según la encuesta de 2006,⁵ en un estudio aplicado a 7 mil 288 mujeres y hombres de todos los estratos económicos, nuestro país refleja la menor movilidad económica de los extremos elaborados por quintiles (medida para estudiar los estratos sociales, en relación con Chile, Estados Unidos, Reino Unido, Suecia, Finlandia y Noruega).

8. Por un lado, 48% de la población clasificada en el nivel estimado de menor ingreso no ha logrado ascender; en contraste, 59% con el rango más alto no ha descendido. Ahora, este drama se podrá elevar exponencialmente por la crisis financiera y económica internacional que nos ha estallado en pleno rostro.

MINISALARIOS Y DESEMPLEO: UN VIAJE AL MUNDO TERRENAL

1. La administración de Felipe Calderón se dedicó, con indudable ahínco, a convertir la comunicación con la población en simples proclamas monotemáticas y notoriamente circulares. El tema de la seguridad pública ocupó la mayoría del tiempo de la agenda presidencial.

2. El país requería verse desde una meseta multidimensional. El tema económico fue uno de los vectores cruciales para entender las profundidades humanas del México real. Cualquier análisis serio que buscara explicar los orígenes de la violencia y el delito tendría que asomarse al mundo del trabajo. En este caso al poder adquisitivo de los asalariados, especialmente de los agrupados en los deciles empobrecidos.

3. El poder de compra de los mexicanos se desplomó 45% en los últimos diez años. Hace una década, con 270 pesos un consumidor podía adquirir: galletas, pan de caja, tortillas, arroz, frijol, jitomate, pollo, carne de cerdo y de res, aceite, azúcar, café soluble, huevo, leche en polvo, leche pasteurizada, sal, sardinas, detergente, escobas y pasta dental. En septiembre de 2010, el costo de esos mismos productos representaba ya 552 pesos, lo que nos habla del enorme deterioro que este gobierno ha ocasionado a la calidad de vida de los trabajadores.⁶

4. Actualmente, un trabajador con ingresos equivalentes a un salario mínimo necesitaría casi diez jornadas laborales para comprar ese paquete

el ingreso de una persona sube o baja de un periodo a otro, y relativa cuando la posición que le da un determinado ingreso con respecto al resto de la población se modifica de un nivel a otro. Además, la movilidad social es un importante indicador de la desigualdad de oportunidades (el grado en que las personas tienen acceso a bienes, como educación o riqueza).

⁵ Encuesta auspiciada por la Fundación Espinosa Rugarcía (Esrú), 16 de octubre de 2008.

⁶ Centro de Estudios de las Firmas Públicas de la Cámara de Diputados, en *Milenio*, 6 de diciembre de 2010, p. 11.

de veinte productos de la canasta básica, cuando en el año 2000 necesitaba 7.6 días de trabajo para hacer la misma adquisición.

5. En lo que toca al empleo, cabe recordar que Felipe Calderón se autodenominó en su campaña electoral como el “presidente del empleo”. Seguramente hoy es molesto y quizá penoso para el ex inquilino de Los Pinos hablar de sus “logros” en esa materia.

6. Sin embargo, la realidad es más compleja —y necia— que los discursos autocomplacientes. El panorama es severo, la precariedad de los salarios nos indica el deterioro en los niveles de vida de amplias capas de la población. Nueve de cada diez personas que se han sumado al mercado laboral perciben menos de dos salarios mínimos.⁷ A finales de 2006, la población que declaró contar con alguna ocupación o empleo había ascendido a 42 millones 846 mil personas. Para el tercer trimestre de 2010, sumaban 44 millones 480 mil 500. La diferencia fue de sólo 1.6 millones de personas, la mayoría de las cuales ganaba menos de 3 mil 447 pesos al mes. 185 mil 900 mexicanos que consiguieron trabajo lo hicieron a cambio de un salario mínimo (mil 723 pesos al mes) o menos.

7. Otras 112 mil 500 personas lograron ocuparse con una paga de más de dos salarios mínimos y hasta tres, lo que implicaba que como máximo percibían 5 mil 171 pesos mensuales. Quienes hace cuatro años habían logrado romper la barrera de los tres salarios mínimos sumaban 12.8 millones. Ahora, 1.3 millones dejaron de pertenecer a este grupo.

8. Si sólo se toma en cuenta a quienes ganaban más de cinco salarios mínimos, es decir, de 8 mil 600 pesos en adelante, la reducción ha sido más drástica: en 2006 sumaban 5 millones, pero cuatro años después quedan 3.9 millones, es decir, 29% menos.⁸

9. Y por si esto no bastara, el promedio de la tasa de desempleo entre latinos en Estados Unidos subió de 12.1% en 2009 a 12.5% en los primeros once meses de 2010, lo que tuvo un efecto significativo en los envíos de dinero a México y en la situación de los hogares más pobres, ya que para 10% de éstos la remesas representan la principal fuente de ingresos totales.⁹

LA EDUCACIÓN DESPRECIADA: CIFRAS GRAVES Y AGUDAS

1. Otro elemento tangencial, tanto en el discurso como en el trabajo presidencial, fue el relativo a la amplia galaxia de la educación. Aquí habría que

⁷ INEGI, “Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo”, 2010.

⁸ *La Jornada*, 6 de diciembre de 2010, p. 30.

⁹ INEGI, “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares”, 2008.

advertir que el presidente estuvo maniatado. Su alianza electoral y política con la lideresa del SNTE limitó su capacidad de tomar iniciativas.

2. En este marco de ausencias de políticas transgeneracionales, México es una de las naciones que más destina al gasto corriente en educación. Sin embargo, de acuerdo con la clasificación por destino del gasto realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), del total de los recursos ejercidos en el sector durante 2006, 97.5% correspondió al pago de nómina y sólo 2.5 a inversiones físicas, lo que coloca al país al fondo de la lista de la OCDE en este rubro. En el mismo año, Brasil invirtió 6.1% de su presupuesto en infraestructura educativa, Alemania 6.7% y Japón casi diez por ciento.

3. Algunos datos nos señalan que en 2007 la cobertura de educación superior era de 27%, inferior a la de Estados Unidos (82%), España (69%) y Canadá (72%).¹⁰

4. Un elemento definitorio del presente educativo en México, y motivo de encendidos debates en distintos foros, es la situación de los jóvenes de 15 a 19 años que están fuera del sistema educativo. Cerca de 45% estaba desempleado en 2008 o no formaba parte de la fuerza laboral.¹¹

5. Según mediciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), en 2008 había 10 millones 482 mil 533 personas entre 15 y 29 años, por lo que los datos de la OCDE revelan que el número de “ninis” en el año referido fue de 4 millones 717 mil 139. Se indica además que el desempleo en ese grupo aumentó 5% entre 2008 y 2009.¹²

6. Paradójicamente, después de Finlandia, México fue el país donde más incremento real tuvieron los salarios de los profesores de educación primaria en el periodo de 1996 a 2007.¹³

7. Como justificación, la administración de Felipe Calderón atribuyó la crisis social y laboral a la coyuntura internacional de 2008-2009. Sin embargo, nuestra debacle tuvo que ver con el modelo neoliberal vernáculo de acumulación.

8. El panorama social mexicano y latinoamericano se complicó en los últimos dos años por la crisis económica internacional. En México, la pobreza creció más que en otros países de la región. También se detuvo la mejora que se había observado en los años previos en la distribución del ingreso, la cual empeoró con la crisis de 2009, al contrario de lo que ocurrió

¹⁰ José Narro Robles, con base en datos de la UNESCO, en *La Jornada*, 18 de mayo de 2010, p.33.

¹¹ “Panorama de la Educación 2010”.

¹² *Reforma*, 8 de septiembre de 2010, p. 3.

¹³ Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, en *La Jornada*, 4 de abril de 2010, p. 26.

en términos generales en América Latina. En 2009, la contracción de 6.5% de la economía nacional llevó a 4.4 millones de mexicanos de regreso a la pobreza.¹⁴

EL GOBIERNO DE ENRIQUE PEÑA NIETO: LA REPETICIÓN DEL DESASTRE¹⁵

1. El regreso del PRI a la titularidad del Poder Ejecutivo Federal abrió un debate central que debió abordarse desde los circuitos y movilidad de la clase dominante y de la dependencia de la economía mexicana del neoliberalismo en tiempos de la posmodernidad.

El arribo del longevo partido tricolor fue el de una operación múltiple y concertada en la que coincidieron los intereses de diversos actores económicos y políticos. El modelo de control de masas patentado por el partido de Calles, Cárdenas, Alemán y Salinas, con sus notables y distintas formas de gobernar, había mostrado su eficacia y logró reeditar lo esencial para las facciones de la burguesía, a saber, la pacífica y onerosa acumulación capitalista.

Sin embargo, los penosos e injustificables excesos de algunos segmentos priístas y el desgaste del modelo vertical de manipulación política, entre otros factores, provocaron el traspie del año 2000, dando paso al triunfo de Fox y, con ello, a un repliegue táctico que no alcanzó a reconstruir su hegemonía para 2006 y prolongó la estancia panista en Los Pinos.

No obstante, su desplazamiento, el ADN tricolor sobrevivió y circuló en las venas blanquiazules, por eso, el novel Poder Ejecutivo navegó sin trastocar la relación privilegiada con dos actores: los dueños del dinero y con las burocracias sindicales de estirpe priísta; esto permitió que Fox y Calderón transitaran, sin grandes conflictos, con las minorías opulentas y los charros sindicales.

Asimismo, los panistas mandaron una señal inequívoca para ganar la confianza y la credibilidad de la clase dominante al mantener a la ya añeja nomenclatura tecnocrática del eje Hacienda-Banco de México, los cuales, como se sabe, son los cancerberos de las agencias financieras internacionales y los protectores del puñado de potentados evasores de impuestos.

2. Peña Nieto no sólo representaba la refuncionalización del sistema de dominación, sino también era la bisagra de una vertiente conservadora anclada en la fidelidad a la Iglesia católica. Su pasado reciente lo describía.

¹⁴ Alicia Bárcena, *La Jornada*, 01 de diciembre de 2010, p. 30

¹⁵ Para profundizar en el análisis del conjunto del sexenio peñista, véase el libro *México a la deriva, y después del modelo policiaco ¿qué?*, Pedro José Peñaloza, tercera edición, 2018. México, UNAM.

La formación educativa de la que abrevó es irrefutable. Casi todas las instituciones educativas en las que Enrique Peña Nieto se formó son confesionales. Desde el Colegio Plancarte de Atlacomulco, atendido por las monjas de la orden Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, hasta la Universidad Panamericana, fundada por el Opus Dei, donde realizó estudios en derecho.

Posiblemente alguien considere que lo anterior es parte de su vida privada, supongamos que sí, aunque no olvidemos que la génesis de nuestro comportamiento se moldea en gran parte por la educación. Pero el nuevo inquilino de Los Pinos no ha establecido la línea fronteriza entre sus concepciones religiosas y el ejercicio en el servicio público, según demuestran varios hechos. Veamos: siendo gobernador, Peña Nieto se mantuvo interesado en cubrir las necesidades y requerimientos de los 14 obispos mexicanos y de otros que pasaron o son originarios del Estado de México. No escatimó recursos para proveer de atenciones, privilegios materiales y hasta caprichos de los prelados. Onésimo Cepeda fue uno de los viajeros frecuentes en alguno de los siete helicópteros Augusta que compró el gobierno estatal; en esa aeronave el obispo se trasladaba de Ecatepec a Ixtapan, sitio de veraneo del gobernador para jugar golf y, por supuesto, degustar vinos franceses. Su entusiasmo con los Legionarios de Cristo es visible.

Bernardo Barranco cuenta que “un experimentado monseñor [le] dijo: ¿por qué los obispos se llevan tan bien con Enrique Peña Nieto? Porque les da lo que necesitan, mientras los panistas no”. Es decir, parece ser que tendríamos la disputa por el corrimiento a la derecha entre el joven imberbe y las falanges panistas. Ya veremos cómo reaccionarían los masones y laicistas del PRI cuando el presidente ejerza su vocación religiosa. Quizá la abyección sólo les permitiera encogerse de hombros.

3. Enrique Peña Nieto vivió una circunstancia de particular complejidad. Lo rodeaban muchos, pero lo apoyaban pocos. Sus cercanos del gabinete estaban nerviosos por la sucesión adelantada. Esperaban el banderazo de su jefe, lo cultivaban y le aparentaban lealtad. La crisis múltiple arrolló a todos. No hubo quien se salvara. En ningún rubro del régimen había buenas noticias. Los pesares y tropiezos perseguían en todo momento al inquilino transitorio de Los Pinos. Sus asesores le inventaron poses, discursos, reuniones con esquemas de simulación y farsa.

Nada funcionó. Su imagen caía en picada y poco o nada la detuvo. El duopolio televisivo parecía distanciarse de él; su utilidad tendía a ser menos importante, era indefendible. Con seguridad ya estaban armando al nuevo candidato.

El peor enemigo de Peña —y vaya que tiene algunos— era la situación económica, ya que el sucesivo crecimiento mediocre y el errático comportamiento de la órbita estadounidense, de la cual depende el país umbilical-

mente, lo imposibilitó a ofrecer alternativas y a levantar banderas optimistas reales de un mundo mejor.

Aunado a su crisis económica, el gobierno también vivía una crisis política y de legitimidad. Los actos violentos en todo el país reflejaban fracturas en las instituciones del control formal y el grupo en el poder no atinaba a plantear alternativas que los desactivaran. ¿Era el costo de la puesta en marcha de una estrategia que tenía como pilar la reacción policial y el endurecimiento penal? Sí, todo indica que no había intención de modificar un paradigma que consolidó, de manera ampliada, Felipe Calderón y que se reprodujo en la administración peñista.

Ahora bien, el presidente Peña había dicho que los principales delitos estaban concentrados en 10% de los municipios, pero que representaban 42% de los homicidios. ¿Qué hizo el grupo gobernante? Nada novedoso. Envió a las fuerzas federales y dejó intocadas las variables sociodemográficas que detonan violencias y exclusiones múltiples. No quiso hacer más, era prisionero de su lógica reactiva y de la convicción neopositivista-penalista de que únicamente el orden garantiza el desarrollo. La vieja y remisa teoría del goteo. Crecer y después repartir es parte del catecismo del peñismo y sus aliados. Los fríos números indican el fracaso.

El titular del Ejecutivo cubriría la formalidad legal y obligatoria de enviar al Congreso de la Unión el corte de caja de su administración. Cifras y números, lisonjas y autocomplacencias, trazos abstractos y lugares comunes. No más. El fracaso de un gobierno que dio inicio plagado de promesas y no pudo cumplirlas. La desesperanza de millones de desposeídos de mínimos satisfactorios y el cinismo de una clase política atrabiliaria e insensible que ya se aprestaba a la disputa por Los Pinos. Y la izquierda exhibida en su enorme pequeñez.

4. Las promesas se diluyen. El grupo peñista entró a la escena pública prometiendo lo que no podía cumplir. Durante su campaña presidencial, como señala José Blanco, “el candidato EPN fue firmando, ante notario, entre el 30 de marzo y el 3 de junio de 2012, 266 compromisos que serían realidad al término de su mandato”.¹⁶ Blanco cita el informe del INAI, quien afirma que el régimen de Peña ha cumplido 80 de los 266 compromisos, es decir, 30% (sin especificar cuáles fueron cumplidos y cómo se cumplieron).

Por supuesto, visto en retrospectiva, sus compromisos resultaban conexos, no únicamente por su incumplimiento y ausencia de rigor analítico de la viabilidad de lo prometido, sino por el creciente proceso de deterioro de la imagen presidencial, salpicada de corruptelas consentidas y estimu-

¹⁶ José Blanco, “No cumplir es lo que aniquila”, *La Jornada*, 13 de septiembre de 2016, p. 17.

ladas, cuyo elemento resulta crucial para concitar el interés de las mayorías electorales.

El incumplimiento de las banderas electorales del peñismo, aunque es un elemento para el análisis integral, hacerlo nos impediría contextualizar el papel de la economía mexicana en las coordenadas del capitalismo financiero internacional, lo cual sería un error metodológico imperdonable.

El presupuesto para 2017 fue la expresión plástica de un Estado que se evaporó en lo social y emergió como un simple instrumento de las nuevas formas de acumulación capitalista de las grandes empresas externas y de su capital asociado.

Los reclamos de diversos sectores y partidos para reestructurar el proyecto enviado por el Ejecutivo al Poder Legislativo, no obstante su pertinencia, por desgracia quedaron como simples y cuasidramáticas expresiones testimoniales. El viejo Estado benefactor se fue para no volver, no al menos con la correlación de fuerzas mundial y local. Por eso la clase política dominante pudo reiterar su desprecio a la inversión en ciencia y tecnología y quitarle recursos, llevamos tres décadas sin pasar de 0.4% del PIB, apunta Carlos Fernández-Vega,¹⁷ o desaparecer el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (PRONAPRED), pequeño intento preventivo para romper con la lógica meramente reactiva.

5. Ustedes los ricos. Dejémonos de evasivas y simulaciones. La inequidad y la desigualdad nos acompañan de forma permanente, aunque algunos sean tan hipócritas o cínicos como para tratar de exorcizarlas con frases huecas y demagógicas. Los insultantes contrastes se convierten en decretos, cíclicamente establecidos en el PEF 2017, ya que el presidente de la República podrá seguir percibiendo un sueldo anual de 2 millones 502 mil 851 pesos, es decir, un salario bruto mensual de 208 mil pesos que, sumado a otros beneficios, alcanza la cifra de 3 millones 460 mil pesos anuales. Asimismo, los secretarios del gabinete conservarán sus 2 millones 461 mil 465 pesos al año, y los subsecretarios percibirán 2 millones 336 mil 500 pesos, lo que significa 205 mil y 194 mil pesos al mes, respectivamente, además de un millón de pesos en prestaciones. En estos tres casos, por si algo faltara, se propuso un incremento de alrededor de 15 mil pesos en seguridad social, seguros y fondos para el retiro. En el caso de los once ministros de la Corte, en 2016 se asignó a cada uno un salario bruto de 4 millones 594 mil 460 pesos anuales y para 2017 pidieron un aumento individual de 150 mil pesos anuales. De esta manera, sus prestaciones subieron 171 mil pesos, por lo que en suma cada ministro costará al erario 6 millones 938 mil 234 pesos al año.

¹⁷ Carlos Fernández-Vega, sección México SA, *La Jornada*, 13 de septiembre de 2016, p. 20.

Los consejeros electorales también mantuvieron sus sueldos de 3 millones 152 mil 808 pesos anuales, mil pesos más que en 2016.

En general, los titulares de organismos autónomos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Transparencia, ganaban entre 2 millones 336 mil pesos y 2 millones 477 mil pesos. Tenían un sueldo bruto promedio de 206 mil pesos mensuales, apenas dos mil pesos menos que el presidente de la República.

Ahora hablemos de los ricos en serio y no únicamente de simples burócratas voraces. Hasta 2016 el SAT “perdonó” 188 mil millones de pesos a contribuyentes —tanto personas físicas como morales— por adeudos de varios años a la autoridad hacendaria.¹⁸ En el último año, el SAT condonó impuestos por 5 mil 635.9 millones de pesos.¹⁹

La burguesía local y sus asociados insistieron en que debía recortarse aún más la propuesta del PEF que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión. Por supuesto, su petición proviene de uno los mandamientos de la religión neoliberal, el cual exige la mínima intervención del Estado en la actividad económica. Aunque a un segmento empresarial le interesa seguir en la comodidad de ser beneficiario de las inversiones estatales y seguir siendo consentido de la política fiscal, como ya se demostró con el trato que el SAT brinda a los consorcios poderosos.

El secretario Meade les explicó, en tono de conmisericordia, a las burbujas de privilegiados, que ya no era posible hacer más recortes porque “todas las secretarías están aportando. No hay una sola que en este gran esfuerzo no haya estado dispuesta a poner de su parte”.

El discurso mediático y demagógico del encargado del despacho de Hacienda se centró en desmentir que se afectaran las políticas sociales. Veamos: el anexo número 13, “Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres”, cuya función es distribuir recursos a diversas dependencias e instituciones a fin de cerrar las brechas de desigualdad, supone un recorte al gasto destinado a la educación, la prevención de la muerte materna, la salud sexual y reproductiva, y a los institutos de las mujeres en los estados para desarrollar programas o acciones para mejorar la vida de las ciudadanas.

Estos recortes afectarán las acciones destinadas a comprar anticonceptivos, antirretrovirales, la detección y tratamiento para combatir el cáncer de mama, que es la primera causa de muerte de las mexicanas, junto al

¹⁸ *El Universal*, 20 de septiembre de 2016, p. 1.

¹⁹ Fundar, Privilegios fiscales: beneficios inexplicables para unos cuantos.

cáncer cervicouterino, el cual en 2012 registraba una tasa de siete muertes por cada 100 mil mujeres, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública. De igual modo, dicho anexo 13 indica que la Secretaría de Salud tuvo un recorte de 50 millones 717 mil pesos.²⁰ Por si algo faltara, para refrescarle la memoria a Meade, el presupuesto para 2017 mostró una reducción al ramo de Educación Pública de 31 mil 600 millones de pesos, lo cual representó un decremento de 10.62%. Asimismo, en el caso del CONACYT, hubo una propuesta de reducción de 8 mil 200 millones de pesos, equivalente a 30% del presupuesto asignado para 2016, que fue de 35 mil 100 millones de pesos. Los secretarios no justificaron los motivos por los cuales eligieron recortar los rubros de educación, ciencia y tecnología, ni tampoco el porqué de las cuantiosas asignaciones adicionales a ciertos programas no prioritarios de la SEP.²¹

La pregunta anterior fue respondida por el inquilino transitorio de Los Pinos de la siguiente manera: “México ha tenido que adoptar, con un sentido de responsabilidad, un recorte agresivo al gasto, en razón, fundamentalmente, de los factores externos, que no dependen del país, sino del mercado mundial, que se ha caído”.²² ¡Clarísimo! Es el capitalismo y sus agencias los que imponen los ritmos de la economía de un país periférico.

6. Tiempos de incertidumbre. En la soledad acompañada de sus mullidos sillones y amplias oficinas, el grupo político en el poder no atinaba a encontrar salidas al torbellino en que se encontraba inmerso. Por supuesto, no estamos hablando de un pequeño traspí del sistema, lejos de ello, presenciábamos una crisis múltiple que atravesaba diversas áreas y espacios.

Expliquémonos: la elite peñista arribó a Los Pinos con las banderas del cambio y las fanfarrias de una “nueva generación”. Ahora, visto en retrospectiva, el saldo que arrojaba el grupo político hegemónico no era nada halagüeño. En todos los rubros se vivía el fracaso y se amplificaba el deterioro de la imagen presidencial, cuyo elemento, sin duda, afectaba la gobernabilidad.

Sin embargo, en la clase política dominante no existía conciencia de su debacle, no obstante el seco golpe de las elecciones estatales de junio de 2015; es más, la respuesta del inquilino de Los Pinos frente al revés sufragista fue imponer en su partido a un presidente, Enrique Ochoa Reza, carente de experiencia política y ayuno de personalidad. Sí, la mediocracia ya ocupaba las oficinas del gobierno, ahora también del priísmo.

²⁰ *Milenio*, 25 de septiembre de 2016, p. 14.

²¹ Patricia Elena Aceves Pastrana, “Opacidad y engaños en el presupuesto 2017 para educación, ciencia y tecnología”, *La Jornada*, 24 de septiembre de 2016, p. 21.

²² Alonso Urrutia, “El ‘agresivo recorte’ al gasto público, por factores externos, afirma Peña Nieto”, *La Jornada*, 24 de septiembre de 2016, p. 4.

El gobierno peñista no podía ni siquiera garantizar las promesas históricas del añojo contractualismo, aquellas idílicas seguridades, tanto personales como patrimoniales, se habían diluido en los discursos vacíos y en los presupuestos cuantiosos e ineficaces. De poco sirvieron los desplantes del populismo punitivo, las cárceles atestadas y las torretas encendidas. La crisis era total. El bálsamo de los juicios orales quedaba como engañosa aspirina frente al derrumbe del sistema penal, que asomaba por doquier sus cuarteaduras.

La “Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública” (ENVIPE), publicada en 2016, reflejaba el miedo colectivo que envolvía a una población prisionera del individualismo, la incredulidad y la desconfianza institucional. Durante 2015 los hogares mexicanos invirtieron 77 mil 900 millones de pesos en medidas de protección; de esta forma, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en el país ascendió a 236 mil 800 millones de pesos; asimismo, se reportó que en ese mismo año se cometieron 64 mil 459 secuestros; aunque una cifra menor que en 2014, siguen siendo datos preocupantes porque equivalen a 176 plagios al día. Además, dicho delito tiene una cifra negra de 99%, a decir de las estadísticas del INEGI.²³

Por otro lado, sobre el nivel de confianza en las autoridades a cargo de la seguridad nacional, la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, la Encuesta arrojó que 87% de la población de 18 años y más identificaba a la Marina como la autoridad que mayor confianza le inspiraba. En pocas palabras, para ratificar el carácter de la crisis sistémica, la credibilidad se orientaba a un cuerpo del Estado que no está preparado ni tiene como función primigenia el desarrollar tareas que enfrenten la inseguridad urbana. Por tal motivo, no es casualidad el crecimiento de la llamada “cifra negra”; así, el descrédito de los ministerios públicos resulta explicable.

Es evidente que la crisis política y social del grupo en el poder presentaba múltiples raíces y todo indicaba que tendía a profundizarse, por una sencilla razón: no tenía nada sólido que ofrecerle a una población mayoritariamente atrapada por la desesperanza.

UNA PROPUESTA PARA ROMPER CON LA RUTINA REACTIVA

1. Empecemos a correr el lápiz. Una primera vía para contrarrestar el sórdido ambiente de la sociedad delatora, perezosa y apática que se empieza

²³ *Reforma*, 28 de septiembre de 2016.

a coagular en la vida de las principales ciudades del país, es plantear e instrumentar otro modelo para la interpretación de los hechos delictivos y violentos.

2. Necesitamos proponer, sin ambages, que el punto de partida para dar un salto cualitativo en la comprensión de la conflictiva social sea contar con instituciones que tengan funciones articuladoras, y que no sean solamente vigilantes de estancos aislados. Sí, un nuevo andamiaje del Estado que tenga objetivos explícitos prospectivos y no puramente sexenales.

3. Esto implica darle a cada disciplina su valor específico. Por ejemplo, aceptar que la presencia del sistema penal es esencialmente simbólica —como siempre lo ha sido—, y en consecuencia el encierro y el castigo no pueden seguir siendo los elementos que midan el éxito o el fracaso de las políticas públicas.

4. Para poder empezar a salir de los sótanos conceptuales en que nos metieron los beneficiarios de la vulnerabilidad ciudadana y los administradores del miedo, se requiere poner a funcionar un paradigma distinto que supere el simple ataque a los síntomas de la descomposición social.

5. Requerimos generar propuestas específicas de estructuras que tracen un camino opuesto al que sigue hoy el aparato institucional. Una propuesta puntual que sería el primer eslabón de una nueva arquitectura estatal es la creación del Sistema Nacional de Prevención Social del Delito,²⁴ que coordinaría a todas las áreas gubernamentales involucradas en temas sociales, con el propósito de planificar el destino de los recursos públicos y evitar duplicidades en las acciones preventivas, protectoras y rehabilitadoras. Estaría constituido por instancias gubernamentales y sociales; participarían las universidades y agrupamientos especializados que contribuyan a perfeccionar los análisis criminológicos, económicos, culturales, de salud pública y educativa, entre otros, para garantizar y perfeccionar la intervención en los segmentos sociales que estén en condiciones de inequidad y vulnerabilidad social.

6. Desde ahí se abordarán sistemáticamente y con una visión caleidoscópica los comportamientos, tendencias y reacciones de estamentos sociales que antes sólo eran “atendidos” por el sistema penal.

7. El punto nodal que le da sentido al sistema que proponemos es que sea el Estado el que correlacione desigualdad social, inseguridad pública y cohesión social, un trinomio que permita entender y abordar a los distintos perfiles poblacionales, para definir a partir de ahí y sólo de ahí las políticas específicas, incluidas las presupuestales. Pero sobre todo, se socializarían

²⁴ Para conocer la propuesta de un sistema como este, véase Pedro José Peñaloza, *¿Castigo sin prevención? La crisis del modelo de seguridad pública en México*, México, Porrúa, 2008.

y transmitirían, como brújulas comunitarias, dos pistas: el sentido de pertenencia y la cohesión social, para dejar de pensar en “los otros” y aceptar que la diversidad no es un estorbo sino una riqueza.

8. En lugar de la lógica de “participación ciudadana” por decreto, esta alternativa sería una opción tangible para lograr el resarcimiento del tejido social. El cemento sólo puede provenir de la asociación entre el Estado y la voluntad libre de las comunidades, las cuales empezarán a apropiarse ideológica y culturalmente del concepto de seguridad, no sólo como sinónimo de delitos y violencia, sino también y sobre todo, como andamiaje de la convivencia entre distintos, convivencia que se expande transversalmente al construir valores comunes.

9. Ahora sí, desde esta meseta institucional, el Estado dejaría de obsesionarse con el encarcelamiento y la disciplina; los recursos públicos tendrían como destino central garantizar la convivencia mediante la permanente y sistemática lucha contra la desigualdad social y en favor de la inclusión. Se dejaría de hablar de la seguridad como único elemento unificador y empezáramos a hablar de las otras seguridades (la social, la educativa, la laboral, etcétera).

10. Se puede y debe garantizar el respeto a las normas jurídicas y, al mismo tiempo, colocar en el corazón de las políticas públicas la lucha contra la desigualdad y la pobreza, para no perpetuar al México fracturado.

11. ¡Cuidado!: sin un acuerdo de largo aliento “transexenal” y sin una brújula consensual, el Pacto por México de 2012, sólo será un nuevo episodio para la reproducción de un modelo que cruje por todos lados, pero que además puede significar simplemente la continuidad del traumático viaje por las arenas movedizas de un país que puede estallar en cualquier momento o sólo hundirse en la desesperanza y en la frustración colectiva.